

**Economías comunitarias:
aproximaciones y experiencias comunitarias**
**Community economies:
approaches and community experiences**

Dylanna Rodríguez Muñoz
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica
dylanna.rodriguez@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0000-0002-4538-527X>

Fecha de recepción: 10 de diciembre del 2024

Fecha de aceptación: 26 de mayo del 2025

Cómo citar:

Rodríguez Muñoz, Dylanna. 2026. Economías comunitarias: aproximaciones y experiencias comunitarias. *Revista Reflexiones*. 105 (2). DOI 10.15517/rr.v105i2.61883

Resumen

Introducción: Los extractivismos de bienes comunes de la naturaleza son parte de una estrategia político-social que se consolida justificando la explotación de la naturaleza como proyecto que promueve el desarrollo de los mercados nacionales y globales. Frente a ello, las comunidades se han visto despojadas y desplazadas no solo en términos geo-territoriales sino también, laboral y económicamente.

Objetivos: Posicionar experiencias de economías comunitarias como formas alternativas de subsistencia y organización en distintos territorios que surgieron o se reinventaron durante la pandemia en el marco de un proyecto de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, las cuales se han mantenido activas y fortaleciendo iniciativas locales.

Método y técnicas: El proyecto desde el cual se acompañan las diferentes experiencias que se presentan en el artículo, parten del enfoque metodológico de la investigación acción participativa y las pedagogías críticas como la educación popular. Los resultados mostrados en el texto son producto de esa aproximación que resulta en procesos de trabajo grupal, participativo, dialógico, reivindicador de la memoria histórica y de saberes plurales.

Resultados: Construir alternativas al sistema económico hegemónico supone para las comunidades una forma de procurarse bienestar de forma colectiva, solidaria e identitaria.

Conclusiones: Las economías comunitarias buscan redistribuir los bienes y recursos, permitiendo mejores condiciones económicas dentro de la comunidad, gestionando de forma colectiva las actividades económicas. Por otro lado, se resalta el papel de la Acción Social en el vínculo Universidad-Sociedad.

Palabras clave: Territorialidad, Soberanía Alimentaria, Ferias Comunitarias, Rutas Solidarias, Acción Social.

Abstract

Introduction: The extractivism of common natural resources is part of a broader socio-political strategy that legitimizes the exploitation of nature as a means to promote the development of national and global markets. As a consequence, communities have been dispossessed and displaced—not only territorially but also economically and in terms of labor—leading to significant social impacts.

Objectives: This project aims to highlight community-based economic initiatives as viable alternative models for subsistence and social organization. These experiences emerged or were reinvented during the COVID-19 pandemic within the framework of a Social Action program at the University of Costa Rica. Many of these initiatives have persisted and strengthened local resilience and solidarity.

Methodology and Techniques: The project supporting these diverse experiences is grounded in Participatory Action Research and critical pedagogies, such as Popular Education. The findings presented are the result of this approach, which emphasizes collaborative, participatory, and dialogic processes that valorize historical memory and diverse knowledge systems.

Results: Developing alternatives to the dominant economic system enables communities to pursue collective well-being, solidarity, and cultural identity. These community economies serve as a means to foster social cohesion and economic resilience from within.

Conclusions: Community-based economies seek to redistribute resources and goods more equitably, improving local economic conditions through collective management of economic activities. Additionally, the role of Social Action is crucial in strengthening the link between the university and society, fostering social transformation and community empowerment.

Keywords: Territoriality, Food Sovereignty, Community Fairs, Solidarity Routes, Social Action.

Introducción

Este artículo surge como parte del trabajo realizado en el proyecto de Acción Social “Economías comunitarias: subsistencia y articulación territorial” de la Escuela de Ciencias Políticas y en el Programa Kioscos Socioambientales (PKSA) de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Este trabaja con comunidades en distintos territorios, tales como: Pacífico Central (Chomes, Jarquín, Punta Morales y Guacimal), Brunca (Longo Mai, Volcán y Territorio Indígena Térraba), Atlántico (Territorio Indígena Bribri y Sixaola) y Zona Norte (Guatuso y Los Chiles) frente a

actividades extractivas que tienen implicaciones directas sobre poblaciones, territorios y bienes comunes tangibles e intangibles.

Más allá de un abordaje teórico amplio y profundo, el artículo pretende compartir experiencias concretas que se han acompañado desde la Acción Social como área sustantiva de la Universidad, destacando y visibilizando conocimientos que se construyen como parte de los procesos de acompañamiento que son tan valiosos como aquellas aproximaciones. Estos privilegian el saber meramente academicista, sin perder la rigurosidad científica.

El modelo de producción capitalista profundiza los individualismos y la idea de bienestar para sí mismo más que reforzar la importancia y potencia de lo colectivo, según señala Hinkelammert es “la renuncia a toda experiencia de fraternidad en nombre de la mano invisible, declarada en contra de toda experiencia del realismo del amor al prójimo o de la fraternidad” (2018, 27)”, de esta forma, se configura en la medida en que mercantiliza todo “el conocimiento y la tecnología, los recursos naturales y, por sobre todo, el trabajo” (Oneto 2007, 8).

Como resultado de este modelo entre otros impactos, tienen lugar profundas desigualdades sociales, económicas, políticas y ambientales, evidentes en diferentes territorios y poblaciones. En este caso, el texto se centrará en experiencias desarrolladas en territorios costeros y campesinos en los cuales, la implantación de la agroindustria ha resultado en despojo de tierras, transformación de las actividades socioeconómicas, daños ambientales y en la salud pública.

Señalan Mies y Shiva (1993), que “cuando las economías se reducen al mercado, la autosuficiencia económica se percibe como una deficiencia.” (20). Y es que precisamente, pensar la economía desde una perspectiva comunitaria es reivindicar y desarrollar formas que trascienden al mercado “esto supone ir más allá de las categorías artificiales, incluso falsas, de crecimiento económico permanente, es decir, el libre comercio, el consumismo y la competitividad. Significa centrarse en el bienestar planetario y humano, en las economías vivas, en vivir bien —no tener más—, en valorar la cooperación por encima de la competitividad” (27-28).

Lo anterior, cobra sentido en un contexto nacional en el que comunidades que históricamente se han dedicado a la producción diversificada de alimentos o a la pesca artesanal, se han visto obligadas a insertarse en el mercado laboral manufacturero haciendo dependiente la economía familiar de la contratación o no de mano de obra por parte de las empresas principalmente del agronegocio, en su mayoría, transnacionales que se han apropiado de grandes extensiones de tierra o que practican actividades pesqueras de gran escala.

Frente a ese escenario, la pandemia provocada por el virus COVID-19 que inició en Costa Rica formalmente en el 2020¹, expuso el papel que desempeña el sistema de mercado, el agroalimentario y todo el entramado corporativo e institucional que da sostenimiento a la profundización de la agroindustria sobre los territorios. Así, se están

¹ Decreto Ejecutivo 42227-MP-S <https://www.ict.go.cr/en/root-documentos-no-apagar/material-de-apoyo-coronavirus/decreto-declaratoria-de-emergencia/1644-decreto-ejecutivo-42227-emergencia-nacional/file.html>

violentando sus derechos y provocando empobrecimiento, “la pandemia por COVID-19 tuvo fuertes repercusiones en el empleo y su recuperación no solo es lenta, sino también desigual” (Programa Estado de la Nación 2022, 138).

Dicha coyuntura planteó desafíos como sociedad y en particular, implicó repensar el papel de la Universidad en su vínculo con la sociedad. En este caso, la Acción Social se enfrentó entre otros, al desafío de mantener el contacto con las comunidades desde la virtualidad y abrir espacios en los cuales tuvieran protagonismo las voces de los territorios, visibilizar sus necesidades particulares, estrategias organizativas y alternativas socioeconómicas. Volver la mirada a diversas realidades permitió identificar problemáticas estructurales e impactos, así como las potencialidades y la amplitud en conocimientos populares que aportan a los procesos que se gestan, con el propósito de hacer frente a cada situación desde los intereses comunes. La importancia de lo común radica en la construcción de prácticas de cuidado colectivo en la vida cotidiana para el bienestar.

En ese sentido, entre el 2020 y el 2021 se desarrolló un proceso diagnóstico² coordinado por los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, TC-590 “Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales” y TC-666 “Dialogando con el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas” de las Escuelas de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, respectivamente. Se aplicó en las siguientes provincias: Puntarenas (37,14%), Alajuela (35,24%), Guanacaste (23,81%) y Limón (3,81%) a personas y organizaciones vinculadas con proyectos de Acción Social, de manera que se garantizó el seguimiento y acompañamiento a partir de los datos arrojados por el diagnóstico.

Este diagnóstico se planteó con tres propósitos, principalmente. Primero, para conocer las implicaciones comunitarias, familiares y socio productivas frente a la coyuntura de la emergencia del virus COVID-19 que estaban enfrentando las comunidades con las que proyectos de Acción Social tenían vinculación³. Segundo, en virtud de visibilizar las diversas situaciones que enfrentaban los territorios campesinos, costeros, transfronterizos e indígenas en el país, siendo poblaciones vulnerabilizadas y empobrecidas que quedan más expuestas ante los efectos de la crisis socio económica, derivada de la emergencia sanitaria. Y tercero, porque como universidad pública y específicamente desde la Acción Social, es primordial partir del contexto y construir iniciativas a partir de las condiciones, necesidades y prioridades que contemplen las comunidades, entendiendo esto como un ejercicio dialógico que implica pedagogizar la experiencia de trabajo en el vínculo universidad-sociedad.

² En el 2021, se realizó la presentación de los resultados del diagnóstico comunitario. Visite el enlace: <https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos/videos/293590275886257>.

³ Algunas notas de prensa, que se registran de dicho proceso, se indican a continuación: <https://semanariouniversidad.com/opinion/diagnostico-comunitario-para-la-accion-social-pandemia-y-desafios/> <https://semanariouniversidad.com/pais/ucr-y-el-ina-region-chorotega-realizan-diagnostico-comunitario-en-el-marco-de-la-pandemia/> <https://surcosdigital.com/resultados-diagnostico-comunitario-de-territorios-y-poblaciones-vulnerabilizadas-en-el-marco-de-la-pandemia/>

El proceso permitió posicionar reflexiones que se tejen desde los territorios, visibilizar las realidades negadas y responder al gran desafío que implica para la acción social, la investigación y la docencia, el vínculo que se genera desde su quehacer con esos territorios. Así mismo, este diagnóstico permitió evidenciar las violencias que se siguen gestando sobre los territorios y que se hacen más evidentes en un contexto de pandemia. Frente a ese escenario, las comunidades se vieron vulnerabilizadas al depender de actividades productivas hacia afuera con implicaciones como el desempleo.

Como parte de las situaciones límites que vivenciaron las comunidades en medio de la crisis de la pandemia, se impulsaron ideas que fueron un viaje de retorno y aprendizaje hacia las raíces de los pueblos en relación con la producción, el intercambio y comercialización.

Así, surgieron iniciativas de economías comunitarias que procuraban el bienestar de la colectividad, es decir, mientras un sistema capitalista sediento de recursos profundiza desigualdades e injusticias, otras economías resisten o se reinventan para cuidar la vida, satisfacer necesidades básicas y ofrecer soluciones concretas a las múltiples problemáticas que tienen presencia en los territorios.

Lo común penetra en la comprensión de la propiedad colectiva y en las herramientas que surgen para proteger los recursos, pensar en bienes comunes es una apuesta que privilegia la cooperación sobre la competitividad. Es justamente sobre las relaciones de cooperación y solidaridad que se basan las experiencias y el quehacer del proyecto mencionado el cual, tiene como objetivo central apoyar economías comunitarias que nacieron o se fortalecieron en el marco de la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia. Al mismo tiempo se prioriza en como potenciar las estrategias comunitarias de subsistencia, cuidado y los procesos de articulación territorial en pro de mejorar el bienestar de las personas. En tanto, se plantea la necesidad de aportar desde la universidad a ampliar los conocimientos, las vinculaciones y posibles iniciativas que apunten a transformar y diversificar las apuestas socioeconómicas.

Balance socioeconómico a partir del diagnóstico

La aplicación del diagnóstico comunitario reveló que la pandemia recrudeció y agudizó la condición histórica de las poblaciones que dependen de actividades primarias como la pesca y la agricultura, actividades que se vieron fuertemente afectadas. Según el diagnóstico en mención, gran parte de la población económicamente activa no pudo continuar con sus actividades después del cierre dispuesto por las autoridades gubernamentales, siendo las personas trabajadoras del sector informal, las más perjudicadas.

“La irrupción de la COVID-19 en la región se verificó en un contexto caracterizado por la desaceleración económica y la ralentización o reversión de las mejoras laborales logradas en los años previos, pero donde también persisten características estructurales presentes antes de la pandemia asociadas con la elevada informalidad laboral, rezagos en la productividad, bajos ingresos laborales, significativas brechas salariales y debilidades en los sistemas de

protección social y de salud en cuanto a cobertura y suficiencia de las prestaciones” (Maurizio 2021, 2)

En el primer año de pandemia, la tasa de desempleo en Costa Rica alcanzó números inimaginables, según Madrigal (2020) para el mes de agosto del 2020 eran 551 mil las personas desempleadas; en términos generales la tasa había alcanzado el 24%. La afectación laboral, no solo implicó la pérdida total o parcial del empleo, o tener que realizar otras labores que se lograron concretar transitoriamente, sino también, la reducción salarial. Según las personas entrevistadas en el diagnóstico, un 71% de las familias vieron perjudicado el empleo. En definitiva, “la pandemia y el proceso de recuperación posterior, evidencian la enorme vulnerabilidad de la economía costarricense” (Estado de la Nación 2023, 119), así también:

“Con una perspectiva de largo plazo, el estilo de crecimiento económico que retomó el país luego de la pandemia recrudece las desigualdades productivas y laborales entre los diversos sectores y territorios, que se vienen arrastrando desde hace décadas”.

El diagnóstico comunitario arrojó que gran parte del deterioro en la calidad de vida, estaba relacionado con la implantación de actividades agroindustriales, de manera que, muchas de las familias dependían en buena medida de la contratación en plantaciones, planteles, jornales, entre otros. Precisamente, los extractivismos se sirven de diversas formas de despojos para expandirse y expulsar cada vez más a las comunidades, limitar la capacidad de desarrollarse de acuerdo con sus costumbres de producción, cría de animales, de pesca, de uso de los bienes de la naturaleza, para convertirlos en mano de obra explotada, sin garantías ni derechos.

Estas circunstancias, en consecuencia, deterioran las relaciones sociales, productivas, ecológicas y políticas a una lógica instrumental que conlleva la ruptura de vínculos comunitarios, la decadencia de las economías locales-regionales, la pérdida de diversidad cultural y la degradación del ambiente (Galafassi y Dmitriú 2007). Durante la pandemia,

“el recrudecimiento de la desigualdad económica ocurrió en un entorno monetario más adverso, con altas tasas de interés y aumento en el costo de las materias primas. En agosto de 2022 el país alcanzó la inflación más alta de los últimos catorce años, panorama que afectó en mayor medida a los hogares de menores ingresos, especialmente por el elevado incremento en los precios de los alimentos” (Estado de la Nación 2023, 119).

Ese contexto provocó que muchas familias tuvieran acceso limitado a la alimentación, si bien, en zonas agrícolas hay mayor posibilidad de producir, y eso fue lo que hicieron, lo cierto es que la profundización de la agroindustria ha transformado las actividades socioeconómicas y algunas familias que en ese momento estaban insertas

como mano de obra de las empresas, retomaron en la pandemia las prácticas agrícolas familiares y en algunos casos comunitarios, como se verá más adelante.

Proyectos de corte económico, complejizan el escenario en lo que según Svampa (2013), es el marco en el cual se desencuentran lógicas territoriales a causa de tensiones entre visiones y sentidos que emergen no sólo en relación con los impactos de las prácticas extractivistas, sino también, por la transformación de formas culturales, sociales, económicas y políticas de reproducción social que convergen en el territorio. “Dejemos claro que tras la pandemia y sus causas está el capitalismo, que se acomoda o evoluciona, pero mantiene sus mismos viejos objetivos que le sirven para seguir perpetuando: tener ganancias, privilegios, para lo cual exagera el control y la represión” (Alianza Biodiversidad 2020, 3). Para el capitalismo todo tiene precio, desde la educación, la salud, la cultura hasta la vida misma, sin embargo, a partir de una coyuntura específica y reflexiones que surgen en algunos territorios respecto a las lógicas de producción y comercialización que se promueven desde el mercado capitalista, se concretan iniciativas comunitarias que promueven el intercambio local de una manera más directa y diversificada, sin que en ese caso, medien las reglas del mercado sino los propios acuerdos colectivos.

Aproximaciones a las economías comunitarias

Las tensiones comerciales entre potencias económicas, los aranceles cruzados y las políticas proteccionistas han reconfigurado el tablero del comercio mundial. Mientras los gobiernos y las empresas multinacionales negocian según sus intereses, el impacto se refleja en el aumento del costo de vida, el debilitamiento de los mercados emergentes, el aumento de los precios en productos importados y la paralización de pequeñas empresas que dependen de materias primas, por mencionar unos cuantos.

“Existe en general la falsa idea de que los sistemas de producción basados en la diversidad son poco productivos. Sin embargo, la elevada productividad de los sistemas uniformes y homogéneos es una categoría contextual y construida teóricamente, que sólo toma en consideración los rendimientos y la producción concebidos de manera unidimensional. La supuesta baja productividad de los primeros sistemas frente a la supuesta alta productividad de los segundos no expresan, por lo tanto, una medida neutral y científica, sino una evaluación sesgada en favor de los intereses comerciales, para los cuales la maximización de la producción concebida en términos unidimensionales es un imperativo económico” (Mies y Shiva 1993, 15).

Frente a este panorama, las economías comunitarias demuestran que hay otras formas de sostener la economía, ofreciendo una respuesta local, descentralizada, sostenible y en algunos casos, ligada a procesos de defensa de los territorios. Lejos de perseguir la acumulación de capital, su objetivo es satisfacer las necesidades de la

comunidad mediante modelos productivos justos, participativos y cooperativos tales como las huertas comunales, ferias de productos locales, rutas solidarias, cuidado e intercambio de las semillas criollas y un sin fin de posibilidades.

“La dificultad mayor de la economía contemporánea es la oposición entre la forma de entender la economía en la visión *mainstream*, versus el objetivo de compromiso por la salud del planeta y una vida sana y digna para todos. Es decir, la oposición que existe entre una economía financiarizada centrada en el lucro y la acumulación de riquezas; y otra que ponga en el centro la vida humana y del planeta como un todo, como un ecosistema. Por eso se cuestiona la capacidad de la economía vigente para resolver los problemas del bien común” (Artavia-Jiménez et al. 2019, 22)

Experiencias de economías comunitarias han permitido sostener la vida, generar producción e intercambios aún en las condiciones más adversas como, por ejemplo, una toma de tierras o una comunidad migrante. Son realidades, prácticas y visiones económicas que tienen en común una ética de la solidaridad y señalan la posibilidad de ubicar la reproducción de la vida y el trabajo para el bienestar familiar. Uno de los grandes valores de las economías comunitarias es su capacidad para apuntar hacia la soberanía alimentaria siendo fundamental una red local que sostenga la producción y el acceso justo a los alimentos sin depender de grandes cadenas que responden a lógicas de mercado. En momentos donde el alza de aranceles encarece productos agrícolas y limita el acceso a insumos clave, las comunidades que producen localmente sus alimentos tienen mayor control sobre su abastecimiento.

Esta forma de economía puede aportar a un paradigma que se construye desde los saberes y conocimientos de los territorios que se fortalece a través de diversas prácticas socioeconómicas de familias y organizaciones, lo cual, aporta claves para pensar que es posible otra economía contextualizada a los territorios y posibilidades que se encuentran en ellas. Así, mantienen su esencia, símbolos y principios, proporcionando sentido de pertenencia, de un todo, donde cada persona no solo genera un proceso de producción e intercambio, sino que abona a la organización. Esas propuestas le apuestan a colectivizar y disminuir las desigualdades.

La economía comunitaria toma fuerza dentro de distintas comunidades del país al reconocer la incapacidad e inoperancia de los gobiernos de turno para garantizar condiciones justas de vida, por tanto, es prioritario construir alternativas que solventen necesidades básicas, a la vez que resignifican el intercambio y la producción hacia una vía de soberanía. “La seguridad y soberanía alimentaria dentro de la economía comunitaria, centra a la vida como el fin último de sus prácticas y objetivos, en esta búsqueda la seguridad y la soberanía alimentaria son los ejes esenciales del circuito productivo de la economía propia.” (Milena et al 2010, 332). Las personas que se reconocen como parte de una colectividad tejen relaciones con el territorio, dinámicas potencialmente entendidas como procesos de apropiación o reapropiación territorial.

Estas interpelaciones permiten articular lo comunitario y lo político, lo cultural y lo jurídico, para defender lo colectivo.

Como enfoque económico centrado en la comunidad, tiene una serie de elementos que permiten analizarla como entramado. Uno, respeta y defiende la identidad expresando las iniciativas culturales y reivindicando los saberes ancestrales. Dos, se construyen las relaciones comunitarias recíprocas que permiten redistribuir los recursos y construir mecanismos de subsistencia colectiva. Tres, se crean formas económicas locales que permiten mayor soberanía y autonomía de los pueblos a la vez que se promueve la organización como base fundamental de la gestión comunitaria. Sobre lo anterior, más adelante se ahondará en casos específicos que dan cuenta de cómo es posible construir alternativas económicas, en línea con procesos comunitarios, agroecológicos y artísticos.

La experiencia de trabajo desde el proyecto de acción social en mención no necesariamente encaja dentro de los conceptos o prácticas que en el sur del continente se vienen trabajando desde territorios como Bolivia o Ecuador con una visión de plurinacionalidad. Sin embargo, el sentido de lo común está estrechamente relacionado, problematizando y actuando en torno a la disputa por la propiedad privada, el uso de la tierra, el consumo de productos procesados y otras que tensionan con el sistema hegemónico.

En la práctica cotidiana, los territorios y organizaciones que le apuestan a la economía comunitaria generan iniciativas que buscan la seguridad y soberanía alimentaria a través de la implementación de diferentes acciones, por ejemplo, huertas comunales, cuidado e intercambio de las semillas criollas, grupos de trabajo para formación y gestión de nuevos proyectos. Estas iniciativas o formas de colectivizar la economía, entonces, no son un fin en sí mismo, sino que intencionan procesos para la transformación.

“El pensar el desarrollo y la sostenibilidad de “otras formas de economía” distintas a la economía capitalista, nos invita a evaluar los procesos, no sólo los resultados. Esto permite rescatar y reconstruir una historia que se perdió, y también, permite analizar cuáles han sido los cambios y las transformaciones que se han dado en las prácticas comunitarias y su relación con el mercado y con el modelo de desarrollo productivo” (Milena *et al.* 2010, 337)

Lo anterior, no supone que estas comunidades están en una especie de “aislamiento del mundo capitalista”, pero sí, han problematizado su lugar dentro de ese sistema, encontrando y construyendo formas de hacer posible la reproducción de la vida y el bienestar en el territorio frente a gobiernos y políticas neoliberales que no están solventando las necesidades de las comunidades y poblaciones.

Como enfatiza Zemelman (2007), el estado deja de lado a la comunidad dentro de su funcionamiento y valor de uso, pasando a ser una especie de factor exógeno sin aportes a esa estructura microsociedad que significa la comunidad. En esa línea, “los dominados necesitan crear instituciones propias, diseñadas por ellos mismos, diferentes al estado actual heredero del colonialismo” (Zibechi 2015, 40). Así, vale la pena señalar que los

procesos de cambios no necesariamente se gestionan alrededor del estado, pueden más bien, gestarse desde otros frentes comunes y populares, descentralizando y redistribuyendo el poder, de manera que las comunidades puedan controlar las condiciones de su propio contexto y existencia.

Por ello, las economías comunitarias como práctica colectiva, primero, reivindican lo común; segundo, son una alternativa en tanto se sale de la lógica que promueven instancias estatales en mancuerna con los intereses del mercado y no de la población.

Tercero, posibilita alejarse del trabajo enajenado, la propiedad privada y las prácticas individuales e individualizantes. Cuarto, recupera y reivindica la importancia de la tierra, el río, el manglar, el mar, las prácticas ancestrales e identitarias, así como todos los elementos comunes como medio comunitario en el que se construyen relaciones sociales basadas en la solidaridad, los afectos, la reciprocidad, el aprendizaje e intercambio.

En la medida en que a partir de estas experiencias se construye conocimiento, así como una posición socioeconómica de vida, las comunidades se convierten en sujetas políticas que toman decisiones, gestionan y actúan directamente sobre su realidad, de forma crítica y transformadora.

Experiencias comunitarias

A continuación, se presentan dos experiencias que ejemplifican muy bien la propuesta de las economías comunitarias, en el marco del acompañamiento que hace el proyecto en mención, a comunidades que, a partir de la pandemia, desarrollaron y retomaron un espacio de trabajo colectivo y familiar que permitiera asegurar la soberanía alimentaria y otras necesidades básicas.

Durante la pandemia, estas familias vieron afectada gravemente su subsistencia, por eso, de formas creativas y esperanzadas, decidieron “lanzarse al agua” con iniciativas y proyectos para lograr solventar necesidades básicas.

Longo Mai, Buenos Aires de Puntarenas

En 2013, la comunidad Longo Mai inició una lucha por la defensa de los ríos Convento y Sonador frente a proyectos hidroeléctricos que se pretendían implantar en dichas fuentes de agua. Afortunadamente, la organización comunitaria logró detener esos intentos extractivistas y en el 2015 los proyectos fueron archivados⁴. A partir de esa experiencia, defensoras y defensores locales visibilizaron la necesidad de cuidar el territorio no sólo frente a la privatización de los ríos, sino también, del agronegocio, modelo muy presente en la zona con las piñeras y cañales que por décadas han expandido sus operaciones, despojando a la población y atentando contra la biodiversidad.

A finales del 2015 se realizó la primera feria de personas productoras, una iniciativa que tenía por objetivo incentivar la producción local a la vez que se fortalecía

⁴ Para conocer más acerca de la lucha de esa comunidad, puede revisar la siguiente memoria: <https://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/publicaciones/memorialongoMai.pdf>

el proceso de organización por la necesidad de resistir frente a extractivismos de bienes naturales. Aunque aproximadamente por cinco años dejaron de realizarla, con la pandemia se reactivó a través de un grupo de familias que impulsaron la iniciativa, con ello, se desarrolló un proceso de construcción de estrategias para la gestión colectiva de huertas diversificadas, procesamiento artesanal de los productos, capacitación en agricultura libre de tóxicos, recuperación de saberes sobre comida tradicional y reproducción de las semillas criollas.

De esa manera, la feria no es un espacio únicamente de venta y compra, sino que supone un conjunto de abordajes que en primera instancia buscan asegurar la subsistencia familiar mientras se refuerzan aspectos identitarios y formas de convivencia. La iniciativa ha permitido acentuar una forma comunitaria de organización, producción, consumo e intercambio, asegurando una economía dinámica y con impacto local.

Como parte del proceso de tejer una economía con anclaje comunitario, cada 15 días se realiza una feria en la que participan más de 20 familias con legumbres, plantas medicinales, frutas, granos, verduras, comida preparada y artesanías. A pesar de estar dirigida hacia la misma comunidad, ha convocado interacción con comunidades aledañas suponiendo una ampliación del alcance que como iniciativa logra integrar una lógica de economía comunitaria.

Encontrarse y organizarse para la feria, aprender de técnicas e insumos, intercambiar productos o incursionar en otras formas de producir los alimentos diarios, ha conllevado a problematizar en torno a temas relacionados con el territorio, por ejemplo, el modelo energético, la privatización de agua, la modificación genética de las semillas, el desarrollo inmobiliario y hotelero, entre otros. Todo ello en virtud de posicionarse socio políticamente y gestionar procesos de resistencia ante actividades o políticas que atentan contra el bienestar comunitario.

La comunidad Longo Mai demuestra un compromiso hacia la construcción colectiva de bienestar comunitario de la mano con la defensa del territorio y los bienes comunes de la naturaleza. El proceso organizativo y productivo que se gesta permite impulsar la soberanía alimentaria pero también, ha servido como un espacio de reflexión y resistencia frente a los desafíos del modelo extractivista y privatizador (Figura 1).



Figura 1. Feria comunitaria en Longo Mai

Fuente: Fotografía de Dylanna Rodríguez Muñoz

Chomes de Puntarenas

Chomes es una comunidad que forma parte del Golfo de Nicoya y que se dedica principalmente a la actividad pesquera y molusquera caracterizada “por practicarse de manera artesanal, esto significa que el manejo de las artes de pesca se hace de forma totalmente manual” (Fernández 2013, 139). A pesar de ser una actividad socioeconómica con profundos vínculos de las poblaciones con el mar y los manglares, la sobreexplotación del Golfo de Nicoya vulnerabiliza las condiciones de subsistencia de las familias que dependen de esta fuente de ingresos. Las demandas del mercado han generado presión “sobre los recursos marinos, ya que no solo se utilizan mallas prohibidas, sino que además se ha aumentado el tamaño de las redes o paños para obtener mayores volúmenes de captura” (Fernández 2013, 145). Frente a ello, los impactos de esas prácticas dañinas para los ecosistemas reconfiguran las condiciones en los que se desarrolla la actividad.

Cada año por un periodo de tres meses (mayo-junio-julio) INCOPECA “decreta períodos de veda, en los que se prohíba practicar la pesca con trasmallo, algunas veces permiten el uso de la línea y la cuerda, y otras veces ninguna” (Fernández 2013, 145). Durante ese tiempo, las familias pescadoras ven limitados sus ingresos y aunque se les otorga un subsidio mensual a quienes estén formalmente inscritos como pescadores para supuestamente subsanar los ingresos que dejan de percibir por su trabajo de pesca, el monto es insuficiente, incluso como señala Fernández (2013) “el otorgamiento de este

subsidio ha venido generando algunos problemas, no solo por su bajo monto, sino porque además está sujeto a la realización de trabajos comunales como la recolección de desechos en la playa” (145). En ese sentido, la molestia deviene de la imposibilidad de realizar otros trabajos para solventar las necesidades, a la vez que no hay un mecanismo estatal efectivo, eficiente y justo que reconozca la diversidad de contextos, familias y sobre todo que dignifique el trabajo de la persona pescadora.

Bajo esa premisa, en medio de la pandemia surge la iniciativa por parte de algunas personas, principalmente mujeres, de intentar con algunos emprendimientos que permitieran generar ingresos dentro de una lógica de consumo local. Así, se consolidó un grupo que reivindica la necesidad de aprovechar los bienes locales, naturales y culturales de la comunidad y la zona en general.

Emprendimientos Chomeños, nombre colectivo adoptado por el grupo, actualmente atraviesan un proceso de formación y fortalecimiento organizacional en articulación con el proyecto de Acción Social mencionado. Además, están construyendo redes a nivel regional con el objetivo de revalorizar el papel fundamental de la actividad pesquera en el Golfo. Este esfuerzo busca mejorar las condiciones laborales y comerciales de los productos en un contexto caracterizado por un aumento en la demanda, la escasez de recursos debido a la sobreexplotación y la precarización de las condiciones de las familias pescadoras y molusqueras.

Desarrollar una propuesta de economía desde una perspectiva local ha implicado para esta comunidad afrontar diversos desafíos, por ejemplo, el papel que juegan los centros recibidores que funcionan como intermediarios de la actividad, de esa forma, se encarece el producto para el consumidor, pero la persona pescadora o molusquera por el contrario ve impactados sus ingresos. Por ello, crear mecanismos de venta e intercambio de productos de forma directa ha sido un primer aspecto de abordaje para posicionar el valor de esta actividad y el potencial de seguir abonando hacia formas que mejoren las condiciones de las familias de Chomes.

Pensar la economía es también, pensar en la cultura arraigada en las comunidades, por eso, como parte de esta iniciativa, se creó una feria que agrupa a familias pescadoras y molusqueras, las cuales elaboran diversos platillos con los productos del mar: arroz con mariscos, cocteles de moluscos, ceviches, pescados, cada uno con su sazón y con propuestas cada vez más innovadoras. Esta feria, tiene la intención de mostrar la variedad de gastronomía que puede resultar de ese arduo trabajo que implica el arte de la pesca y la extracción de moluscos. Como parte de las estrategias para posicionar esa cultura e iniciativa de subsistencia comunitaria, cada feria se acompaña de alguna expresión artística, cultural o deportiva que atraiga no solo a la comunidad sino a otras cercanas. Así mismo, como parte de la formación que se ha gestionado, las familias están incursionando en otras prácticas que logran combinar, tales como: elaboración de artesanías, turismo costero comunitario, apicultura y agroecología, bajo la propuesta de continuar haciendo posible, alternativas económicas sin perder las raíces (Figura 2).



Figura 2. Feria comunitaria en Chomes

Fuente: Fotografía de Dylanna Rodríguez Muñoz

Rutas solidarias para la subsistencia

En consonancia con el alcance logrado desde el proyecto, se ha planteado la gestión y desarrollado de rutas solidarias de productos que permitan articular la producción local con mecanismos justos y solidarios de comercialización así como de semillas, considerando que, la pandemia puso en relieve la necesidad de abordar el abastecimiento de alimentos y sus precios, siendo puntas de lanza que conectan a las comunidades que conectan con un sistema agroalimentario que debe priorizar el cuidado y rescate de las semillas sobre las que se apoya todo (Vía Campesina 2020).

Estas rutas buscan abrir vías alternativas al mercado garantizando la valorización del trabajo comunitario y la circulación de bienes producidos en y para los territorios significan, además, una estrategia fundamental para promover la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad, especialmente en contextos de vulnerabilidad y desigualdad.

Estas rutas articulan redes de intercambio y distribución que priorizan la participación comunitaria, la economía local y el cuidado de conocimientos tradicionales. Además, las rutas solidarias fomentan prácticas de intercambio que fortalecen los lazos comunitarios y promueven la autonomía de los actores involucrados. Como señalan Mies y Shiva (1993), estas redes contribuyen a resistir las dinámicas de concentración y monopolio en el mercado agrícola, promoviendo en su lugar modelos de producción y consumo más justos y sostenibles.

Actualmente, el proyecto de Acción Social mencionado gestiona un espacio de formación y construcción colectiva que se denomina Movimiento de Resistencia y Formación “MORFO”, el cual, está integrado por personas defensoras de territorios que, entre otros intereses. Apunta hacia la necesidad de generar procesos de intercambio entre diferentes territorios para asegurar una alimentación libre de agro venenos y diversificada, pero sobre todo que fortalezca la producción nacional.

A partir de la experiencia desarrollada con MORFO se han concretado rutas con un enfoque colaborativo, donde productores, consumidores y organizaciones sociales trabajan en conjunto para garantizar el acceso a alimentos y semillas libres de apropiaciones comerciales y patentes. Es importante destacar el tema de las semillas ya que no solo son vistas como recursos biológicos, sino como patrimonio cultural y colectivo, cuya reproducción es esencial para mantener la diversidad agrícola y cultural (Figura 3).



Figura 3. Grupo Morfo

Fuente: Fotografía de Dylanna Rodríguez Muñoz

Concretamente, las rutas solidarias se llevan a cabo en dos vías: una, el intercambio de semillas criollas de diversos productos, y otra, en la consolidación de un grupo de personas agricultoras, pescadoras y molusqueras que de forma itinerante se movilizan hacia distintos territorios para seguir creando conocimientos en torno a: abonos, medicina natural, creación de huertas, entre otras. A la vez, intercambian productos que muchas veces no son producidos en una u otra zona (Figura 4).



Figura 4. Intercambio de semillas

Fuente: Fotografía de Dylanna Rodríguez Muñoz

Actualmente, las rutas que se encuentran operando como resultado del proceso de articulación de MORFO son:

- a. **Ruta entre Sixaola y Los Chiles:** en este caso, dadas las características climáticas y de suelo de ambas zonas, la ruta consiste en la producción de coco libre de tóxicos. Se generó un proceso productivo en el que personas de Sixaola que cuentan con experiencia en el cultivo y comercialización del mismo, articularon con la comunidad de El Triunfo en Los Chiles para aumentar la producción de un fruto que tiene amplio consumo en el país pero permitiendo a ambos territorios mantener la diversificación de producción agrícola, es decir, sin promover el monocultivo y más bien, apostar por una forma colectiva de suplir una necesidad no solo a nivel regional sino nacional.
- b. **Ruta entre Guatuso y Punta Morales de Chomes:** las comunidades en mención tienen condiciones completamente diferentes en términos de actividades socioeconómicas, climáticas y de suelo. Mientras la primera se dedica principalmente a la agricultura y cría de animales de granja y ganado vacuno, la segunda depende de los productos provenientes del mar y los manglares. Sin embargo, en esa diferencia radica la importancia de los intercambios que suponen esta ruta.

La ruta consiste en la producción de una huerta comunitaria en Punta Morales que llevan adelante mujeres molusqueras y familias pescadoras que pertenecen a ASOOSTRAS una organización comunitaria que nació para buscar oportunidades de desarrollar proyectos productivos relacionados con moluscos y ostras, actualmente se encuentran ejecutando un proyecto de elaboración de líneas marinas para producir ostras en granjas flotantes con miras a desarrollar una iniciativa de plataforma flotante que desde un enfoque cultural y de turismo costero comunitario, reivindique las actividades relacionadas con el mar. Algunas personas integrantes forman parte de MORFO, por lo que surgen articulaciones para intercambiar saberes, productos y por supuesto, siendo esta organización un caldo de cultivo para pensar en otras alternativas posibles a partir de la colectividad y diversidad de experiencias.

En ese sentido, como parte de fortalecer la organización y hacer sostenible el proyecto productivo que sostiene a ASOOSTRAS, se desarrolla la huerta en Punta Morales con acompañamiento y asesoría de personas agricultoras de Guatuso, con el propósito de diversificar la alimentación sin depender del mercado de intermediarios que llegan a la comunidad a revender productos que provienen de la Zona Norte y Occidente. También, se da un trueque de productos como queso, natilla, cítricos, tubérculos, maíz, provenientes de Guatuso, intercambiados por pescado, moluscos, sal gruesa y miel de abeja de Punta Morales.

Como parte de ambas rutas se ha instalado una práctica de intercambiar semillas, como se mencionó anteriormente, el cuidado de esos bienes comunes posibilita la soberanía alimentaria a la vez que disputa la lógica agroindustrial que privatiza la semilla y atenta contra la cultura campesina. La experiencia de estas rutas es un proceso en construcción entre el aporte institucional de la Universidad a través del proyecto de acción social mencionado y las formas de vinculación estratégica que tejen las comunidades y organizaciones movilizadas por el compromiso con el bienestar común y la justicia social, económica y ambiental.

Puntos de llegada: reflexiones experienciales

Repensar el desarrollo y la sostenibilidad de otras formas de economía distintas a la capitalista, nos permite valorar y evaluar los procesos, no sólo los resultados o las ganancias, por ello, es posible analizar los cambios y las transformaciones que se han dado en las prácticas comunitarias, cómo se posicionan frente al mercado y cómo establecen su propio modelo productivo. A continuación, algunos puntos de llegada que se tejen a partir de las experiencias en el contexto costarricense.

Primero, las posibilidades de desarrollo de la economía comunitaria dependen del trabajo colectivo, la organización y las prácticas que gestionen. Para las comunidades que se han mencionado en este texto, como otras que se gestan en distintas partes del país, estas prácticas son vitales en tanto se relacionan con un plan de vida. También, apelan a un sentido de colectividad ya que mientras la economía global fragmenta y jerarquiza, la comunitaria integra y fortalece lo común, tejiendo lazos entre productores y

consumidores, entre personas vecinas que intercambian bienes o servicios, desde la creatividad, la identidad, la ancestralidad y las cosmovisiones.

Segundo, pensar la economía desde las comunidades es posibilitar la participación activa de las mujeres, pueblos originarios, jóvenes y adultos mayores, poblaciones que suelen ser marginadas del mercado formal. Así, no sólo se generan ingresos, sino también dignidad, pertenencia y sentido colectivo.

Tercero, las economías comunitarias representan un campo dinámico y en evolución, que ofrece alternativas al modelo económico neoliberal, poniendo en el centro a las personas, las comunidades y la naturaleza. No obstante, es necesario reconocer que se enfrentan algunos desafíos, especialmente, mantener la viabilidad económica de subsistencia sin comprometer los principios de solidaridad y equidad.

Cuarto, experiencias en la región latinoamericana, han demostrado que a medida que las prácticas se fortalecen y se articulan con movimientos sociales más amplios, tienen el potencial de transformar las economías nacionales y contribuir a un desarrollo más equilibrado y equitativo en la región. De ahí que se resalte la importancia que tienen estas experiencias en vínculo con la organización y la defensa del territorio frente a extractivismos y otras formas de control y despojo.

Quinto, a nivel estatal no hay un reconocimiento de estas formas alternativas en tanto no se integren a la lógica de emprendedurismo o desarrollo rural, estrategias institucionales y de mercado que no necesariamente responden a las necesidades de los territorios, dado que se ha constatado que terminan siendo un caso más de control territorial, económico y social sin mayor impacto transformador en la reproducción de la vida en las comunidades.

Sexto, como se ha presentado a lo largo del texto, hay un entramado de trabajo desde la Acción Social que busca fortalecer el vínculo Universidad-Sociedad, en este caso, procurando visibilizar y posicionar formas comunitarias de organización para el bienestar, para subsistir de forma solidaria y crítica frente a un sistema que apuesta desde estructuras sólidas.

Séptimo, las rutas solidarias pueden comprenderse como experiencias pedagógicas, ya que no solo se limitan a intercambiar productos, sino que, apuestan por construir conocimientos y saberes de forma colectiva y crear mecanismos conjuntos para posibilitar las rutas. Son las comunidades y las organizaciones las que una y otra vez demuestran su capacidad de poner a disposición todas sus herramientas, creatividad y afecto por el trabajo común para asegurar medios para la vida. La Universidad, por su parte, debe cumplir un rol de acompañamiento y de construcción de puentes que permitan intercambiar conocimientos e incidir en experiencias de transformación social, económica y de cuidados.

Como parte de los impactos que ha tenido el proyecto de Acción Social, se destaca la producción de una serie documental de diez episodios que aborda la seguridad, soberanía y justicia alimentaria. *Puntalitos en disputa, ¿qué es lo que comemos?*⁵. Se

⁵ Serie documental *Puntalitos en disputa, ¿qué es lo que comemos?* Vea la temporada en el siguiente enlace: <https://www.ucrq.tv/entramarnos-puntalitos-en-disputa>

realizó en el 2023 en conjunto con Canal Quince UCR inspirada en las experiencias de diversas comunidades vinculadas al proyecto.

El proyecto, del cual sobresalen las experiencias compartidas en este artículo, cuenta con presupuesto ordinario de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica.

Referencias

- Alianza biodiversidad. 2020. «Ganancias, privilegios, control y represión: La respuesta sistémica a la pandemia en América Latina», acceso el 25 de mayo del 2024, <https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Ganancias-privilegios-control-y-represion>
- Artavia-Jiménez, María Leonela, Jorge Arturo Chaves Ortiz, Jonathan Cordero-Bonilla, y Marcelo Valverde Morales. 2019. «Economía solidaria y economía humana: para enriquecer el análisis económico». *Revista Cultura Económica* 37 (97): 15–44.
- Fernández, Doris. 2013. «Pesca artesanal y pobreza en comunidades aledañas al Golfo de Nicoya». Costa Rica: *Rev. Ciencias Sociales* 140: 137-152.
- Galafassi, Guido y Dimitriu, Andrés. 2007. «El Plan ‘B’ de los Capitales Mineros. A propósito de las notas sobre ‘Inversiones mineras en Argentina’ en Le Mon de Diplomatie de mayo 2007». Argentina: Revista *Theomai*.
- Hinkelammert, Franz. 2018. «Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo». México: Editorial Akal.
- Madrigal, Luis Manuel. 2020. «INEC: Desempleo se disparó 12 puntos y alcanzó 24% al segundo trimestre de 2020», *Delfino* 6 de agosto, <https://delfino.cr/2020/08/inec-desempleo-se-disparo-12-puntos-y-alcanzo-24-al-segundo-trimestre-de-2020>
- Maurizio, Roxana. 2021. «Transitando la crisis laboral por la pandemia: hacia una recuperación del empleo centrada en las personas», acceso el 7 de abril del 2024, <https://www.incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Nota-Tecnica-OIT.pdf>
- Mies, María y Shiva, Vandana. 1997. «Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas». Barcelona: Colección Antrazyt, n.º 111. ISBN: 978-84-7426-344-2.
- Milena, Sandra; Mutuberría, Valeria y Chiroque, Henry. 2010. «La economía social y comunitaria en Latinoamérica». Argentina: Revista *Idelcoop*.
- Oneto, Alejandro. 2007. «Capitalismo y desarrollo sostenible en América Latina: un análisis crítico». Chile: Revista *Némesis*.
- Programa Estado de la Nación. 2022. «Informe Estado de la Nación 2022». San José: CONARE, acceso el 1 de febrero 2024, <https://repositorio.conare.ac.cr/server/api/core/bitstreams/7150c491-62f8-4a26-8e9e-347b0733382f/content>.
- Programa Estado de la Nación. 2023. «Informe Estado de la Nación 2023». San José: CONARE, acceso el 1 de febrero 2024, <https://hdl.handle.net/20.500.12337/8603>.

- Svampa, Maristela. 2013. «Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina», Argentina: *Revista Nueva sociedad*.
- Vía Campesina. 2020. «La lucha por las semillas, la agroecología y la tierra están entrelazadas, y son la base para construir un nuevo modelo agrícola», acceso el 10 de mayo 2024, <https://viacampesina.org/es/la-lucha-por-las-semillas-la-agroecologia-y-la-tierra-estan-entrelazadas-y-son-la-base-para-construir-un-nuevo-modelo-agricola/>
- Zemelman, Hugo. 2007. «De la historia a la política: la experiencia de América Latina». México: Siglo XXI.
- Zibechi, Raúl. 2015. «Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías». México: Bajo Tierra Ediciones.